

REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE TIERRAS
(DR-0118)

RESUMEN EJECUTIVO

**PRESTATARIO
Y GARANTE:** La República Dominicana

**ORGANISMO
EJECUTOR:** Suprema Corte de Justicia, SCJ.

MONTO Y FUENTE:	BID:	CO:	US\$11.700.000
		CO/FFI:	US\$20.300.000
	Aporte local:		US\$ 8.000.000
	Total:		US\$40,000,000

PLAZOS Y CONDICIONES FINANCIERAS:	Plazo de amortización:	25 años
	Período de gracia:	4 años
	Período de desembolso:	4 años
	Tipo de interés:	variable. (Intereses capitalizados durante la ejecución)
	Inspección y vigilancia:	1% del Préstamo
	Comisión de crédito:	0,75% anual sobre saldos no desembolsados
	Moneda:	US\$ (Facilidad unimone-taria)

OBJETIVOS: El propósito de la presente operación es alcanzar una Jurisdicción de Tierras eficiente y transparente en su función de asignador y árbitro de la propiedad territorial. Se medirá la eficiencia y la transparencia en base a la celeridad que se alcance en la administración de justicia en materia de tierras, sin menoscabo de la seguridad jurídica del proceso.

Los objetivos específicos de la operación son: (i) el reordenamiento legal e institucional necesario para que la jurisdicción cumpla con eficiencia y transparencia sus funciones; (ii) la actualización tecnológica de sistemas y procedimientos que sirven de asiento a las funciones; (iii) la adecuación de la infraestructura, equipamiento y sistemas al propósito de eficiencia y transparencia; y (iv) el fortalecimiento de los recursos humanos para que puedan desempeñarse adecuadamente en el marco de la nueva estructura y sistemas de la jurisdicción.

DESCRIPCIÓN:

La operación se define como un programa de reformas institucionales de la Jurisdicción de tierras, acompañado de inversiones para consolidar dichas reformas. El Programa consta de cuatro componentes y el compromiso de sus recursos estará condicionado al avance del reordenamiento legal conforme a lo establecido en la matriz de reformas acordada con las autoridades. Los componentes son:

i) Reordenamiento legal e institucional (US\$1,7 millones); ii) Actualización tecnológica e informática (US\$6,7 millones); iii) Adecuación de infraestructura, mobiliario y equipos (US\$17,5 millones); y iv) Fortalecimiento de recursos humanos (US\$0,8 millones). Se incluyen, además, US\$5.2 millones para financiar la Unidad Ejecutora del Programa.

Acciones específicas. Durante la ejecución de este Programa se reformará la Ley de Registro de Tierras; y Legislación Conexa; se descentralizará la organización de la jurisdicción correspondiente; se establecerán nuevos procedimientos de saneamiento titulación y registro; se adecuará la infraestructura geodésico-catastral; se elaborarán nuevos reglamentos de mensura y levantamiento catastral; se desarrollará un sistema de información de catastro jurídico; se remodelará y equipará el edificio sede del Tribunal Superior de Tierras (TST) y se construirán y equiparán tres nuevas oficinas regionales del TST; se establecerá un sistema computarizado de archivo general de datos técnicos del TST; y se adecuarán y/o construirán, incluyendo su equipamiento, diecisiete sedes de Tribunales de Jurisdicción Original y Registro de Títulos a nivel provincial, organizará y ejecutará un programa de capacitación del personal del TST destinado a fortalecer la capacidad y calidad profesional de los funcionarios del sistema.

El Programa será ejecutado en cuatro años por la Suprema Corte de Justicia, mediante una Unidad Ejecutora que se establecerá al efecto.

**REVISION
AMBIENTAL/SOCIAL:**

El Comité de Impactos Ambientales y Sociales (CESI) revisó y aprobó la ficha ambiental de esta operación en su reunión del 30 de mayo de 1997, no requiriendo revisiones adicionales.

BENEFICIOS:

Los beneficios directos buscados con este Programa están asociados al establecimiento de un nuevo marco legal que legitime el desarrollo institucional necesario para establecer la función administrativa y presupuestaria dentro de la Jurisdicción de Tierras y

permita un mejor servicio a los ciudadanos mediante la simplificación de los procedimientos, la reducción de los plazos de tramitación y la mejora en la gestión de los despachos sujetos a la Jurisdicción de Tierras. Parte esencial de los beneficios buscados es mejorar la seguridad jurídica en la tenencia de tierras para propietarios e inversionistas y como consecuencia de ello se esperan los siguientes beneficios indirectos del programa: (i) incentivar una mayor movilización de recursos de financiamiento para fines productivos y el desarrollo del mercado inmobiliario, al mejorar las garantías para los préstamos hipotecarios; y (ii) propiciar la introducción de tecnologías que mejoren la productividad agrícola.

RIESGOS:

El riesgo más importante es que no se adopten las decisiones políticas y cambios legales, institucionales y organizacionales necesarios para garantizar la apropiada gestión presupuestaria de la Jurisdicción de Tierras y, en consecuencia, se deje al esfuerzo de modernización desprovisto del requisito de fondo para su autosostenimiento. Salvaguarda: Este riesgo se ve disminuido por que el principal mandato que garantiza la independencia presupuestaria se encuentra ya vigente con la reforma constitucional de 1994, y en la Ley de Autonomía Financiera del Poder Judicial y el Congreso Nacional. Utilizando la modalidad de ejecución basada en revisiones anuales de seguimiento la presente operación dosificará sus acciones, enlazándolas a los avances en la implementación específica de las reformas todavía pendientes de autonomización de la Jurisdicción de Tierras.

**ESTRATEGIA DEL
BANCO EN EL PAIS
Y EN EL SECTOR:**

El Banco entiende que erradicar la inseguridad jurídica de los agentes económicos y fortalecer la protección de los derechos de los ciudadanos son requisitos de primer orden para que los sistemas de mercado sean gobernables. El Documento de País para República Dominicana (GN-1958-1) destaca como vector prioritario de la estrategia del BID ayudar al país a superar el reto de la gobernabilidad. Se contempla inducir la reforma del Estado mediante el fortalecimiento de los roles que le son propios, incluyendo la regulación de la iniciativa privada y la protección de los derechos individuales como el derecho a la justicia y a la propiedad. La presente operación se inscribe dentro de este vector estratégico de apoyo a la modernización del Estado.

La experiencia del BID relativa a titulación de tierras en el país, asociada principalmente a las

etapas I y III del programa PIDAGRO, se redujo a intervenciones que al no pretender atacar la raíz de los problemas que afectan la titulación, tuvieron un impacto muy limitado en el mejoramiento del sistema. En consecuencia, y como resultado del análisis efectuado, en lugar de un programa de titulación como el originalmente solicitado por las autoridades nacionales, se enfatiza la necesidad de reorganizar la jurisdicción de tierras y se propone en cambio el siguiente programa orientado a la modernización institucional de la misma, que desbloquearía el progreso en ámbitos claves como el clima de inversiones, la intermediación financiera, la productividad agropecuaria, etc. y pudiera conducir, en una etapa posterior, a un esfuerzo organizado de titulación a nivel nacional para promover adicionalmente el lanzamiento de los mercados inmobiliarios.

**FOCALIZACIÓN
EN LA POBREZA:**

Este programa no está dirigido especialmente al grupo de bajos ingresos.

**MONTOS LÍMITES
PARA
ADQUISICIONES:**

Los montos límites por sobre los cuales las adquisiciones de este proyecto se harán por licitación pública internacional son US\$350.000 para bienes, US\$1.500.000 para obras y US\$200.000 para contratación de servicios de consultoría.

**EXCEPCIONES A
LA POLÍTICA
DEL BANCO:**

Ninguna

**CONDICIONES
CONTRACTUALES
ESPECIALES:**

Condiciones previas al primer desembolso: (i) la suscripción de un convenio de ejecución y traspaso de recursos entre el Prestatario y el Organismo Ejecutor; (ii) la constitución formal de la Unidad Ejecutora del Programa y nombramiento de su Director Ejecutivo, conforme a lo estipulado en el presente Documento de Proyecto y sus anexos; y (iii) contrato negociado con la firma seleccionada para la gerencia del proyecto.

Condiciones durante la ejecución ("Triggers"). La convocatoria de licitaciones y compromiso de recursos, estarán sujetos a la aprobación de una nueva Ley de Registro de Tierras y sus reglamentos que simplifique los procedimientos y la gestión de despachos, permitan el uso de tecnología moderna aplicada a la mensura catastral, y a la captura y custodia de documentación de archivo y de despacho

judicial y establezca el Departamento Administrativo en el TST, bajo la supervisión de la División Administrativa de la Suprema Corte de Justicia. Quedan exceptuadas de este requisito las actividades que se indican a continuación: (a) Reforma de la Ley de Registro de Tierras y las actividades de organización para la División Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, incluidas en el componente de Reordenamiento Legal e Institucional; (b) el rescate electrónico de los archivos del Tribunal Superior de Tierras en peligro de pérdida, la actualización de la red geodésica y las consultorías necesarias para revisar y reformar los reglamentos pertinentes, incluidas en el componente de Actualización Tecnológica e Informática; (c) los estudios para los diseños ejecutivos de las obras civiles, incluidas en el componente de Adecuación de la Infraestructura, Mobiliario y Equipo; (d) el apoyo a la Unidad Ejecutora del Proyecto.

I. MARCO DE REFERENCIA

A. Contexto General e Institucional

1. Apertura económica, clima jurídico y eficiencia productiva

- 1.1 Aunque con retraso en relación a otros países de la sub-región, la República Dominicana vive la necesaria transición hacia estructuras que le permitirán mejorar su inserción externa en las condiciones de competencia de la nueva economía global. En esta transición resaltan los esfuerzos de desinversión pública en el aparato productivo y la promoción de soluciones de mercado a los retos del crecimiento y el bienestar. Pero el logro de un entorno proclive al mercado requiere levantar restricciones a la iniciativa privada y la competitividad que aún persisten. Además de las limitaciones de infraestructura básica y energética que dificultan la actividad económica, el país mantiene condiciones institucionales inconsistentes con un uso eficiente de los factores, incluyendo aquellas que comprometen el derecho de las personas y el imperio de la ley. Entre estos factores de desconfianza que entraban los flujos económicos y afectan el costo-país destaca la inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, cuyo mecanismo de sanción fue diseñado para el país de principios del siglo XX, y es claramente inadecuado para acomodar la dinámica económica de hoy.

2. Propiedad de la tierra y seguridad de los agentes económicos

- 1.2 La acreditación de la propiedad territorial en el país se basa en el llamado sistema "Torrens" que postula los principios de legalidad, autenticidad, publicidad, y especialidad de los registros. En la práctica, sin embargo, la titulación funciona en forma precaria y desordenada, comprometiéndose la credibilidad del sistema y sus instrumentos. Como resultado, la documentación que acredita la propiedad con frecuencia no es confiable, ni se respeta, y la invasión de tierras constituye un fenómeno endémico.
- 1.3 Tenencia, invasión y ocupación ilegal. Se calcula que hasta un 40% del territorio de la ciudad capital está ocupado ilegalmente y la incidencia de la invasión es común en el país. Así, gran parte de las transacciones inmobiliarias se limitan al mercado informal, sobre todo en las ciudades donde la ocupación fraudulenta de predios y su urbanización o arrabalización crea un extenso mercado ilegal de tierras. Esto desestimula el desarrollo y complica la dotación de servicios en áreas pobres, usualmente sobrepobladas. La densidad de 160 personas por Km² implica una alta presión de uso de la tierra y sus recursos. Sin embargo, el Estado controla el 48% de la superficie agrícola aportando sólo el 17% de la producción sectorial. Tal presencia dominante y la presión de uso explican en parte la estructura privada de tenencia dominada por propiedades inferiores a las 5 ha., con frecuente confusión de lineros. En el ámbito de la propiedad territorial la desinversión pública tendría, en consecuencia, un impacto de desarrollo decisivo siempre que se resuelvan las distorsiones que entraban el mercado.

- 1.4 Trabas básicas. El sistema de titulación no facilita un uso eficiente de la tierra privada, ni promueve los mercados inmobiliarios. Dada su extremada lentitud y rigidez, el proceso legal no provee un mecanismo adecuado a la demanda potencial de transacciones en una economía donde el rol del sector privado se expande cada vez mas. La dificultad de ofrecer la tierra como garantía ante la banca constituye una barrera efectiva de acceso al crédito para sectores productivos y la pérdida de valor de la hipoteca como colateral financiero inhibe la movilización de recursos esenciales a la economía. La falta de títulos confiables también desincentiva la adopción de nuevas tecnologías agrícolas, limita la inversión privada en infraestructura y vivienda urbanas, e impide a los municipios contar con catastros adecuados.

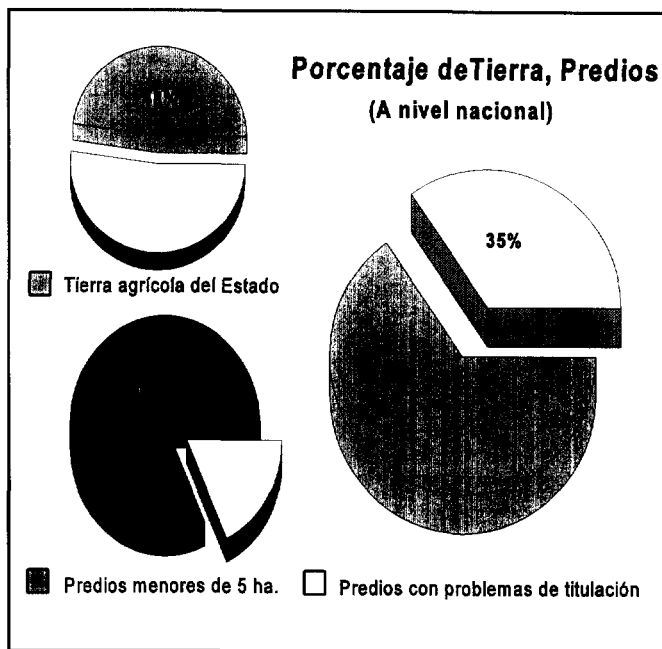


Figura 1: República Dominicana. Indicadores de Tenencia de la Tierra

- 1.5 En el país la función de acreditar la propiedad sobre la tierra y arbitrar sobre la misma incumbe al Poder Judicial y se ejerce a través de la jurisdicción especial de los llamados "Tribunales de Tierras". De allí que la incertidumbre de las transacciones en el mercado inmobiliario, como en otros ámbitos críticos, resulta en buena medida de debilidades en la administración de justicia.

B. El Sistema de Administración de Justicia

1. Organización interna y posición dentro del Estado

- 1.6 La administración de Justicia en el país es centralizada e históricamente ha sufrido de importantes deficiencias en materia gerencial y de status institucional frente a las otras ramas del Estado. La estructura consta de 379 tribunales, incluyendo los de Tierras, bajo la autoridad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como lo ilustra el diagrama 1. A pesar de la separación de poderes establecida en la Constitución, el principal factor limitante del Poder Judicial Dominicano ha sido su dependencia de los otros poderes públicos. Tradicionalmente carente de autonomía presupuestaria, la Judicatura ha dependido para su operación de la asignación que el Ejecutivo le otorgue, muchas veces

contraviniendo lo presupuestado por el Congreso. A la falta de autonomía se ha añadido la designación política de jueces y staff para explicar la escasa institucionalidad del sistema

- 1.7 Dependencia presupuestaria. El presupuesto anual sometido por el Poder Judicial ha sido siempre rutinariamente corregido por la Oficina de Presupuesto (ONAPRES) sin consulta con la SCJ; ignorándose frecuentemente los planes de ésta y asignándosele a la postre lo que decide el Presidente de la República. Esto resulta en un "sub-desembolso" de fondos ya de por sí "sub-presupuestados" y con frecuencia apenas suficientes para cubrir gastos de personal.

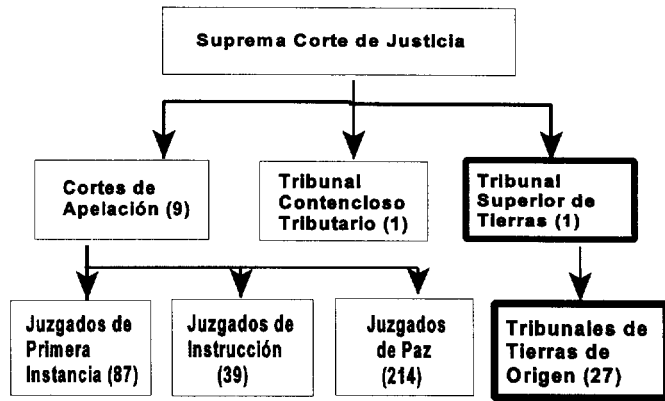


Diagrama 1: República Dominicana. Estructura del Poder Judicial

- 1.8 Interferencia política y administrativa. La designación de jueces por el Senado y de funcionarios judiciales por el Ejecutivo dio paso a una politización excesiva de la justicia. No existe un sistema de capacitación que compense las deficiencias profesionales y los déficits presupuestarios forzaron siempre niveles salariales precarios, haciendo difícil atraer personal calificado y abriendo espacio a manejos ilícitos. Afortunadamente, durante los últimos años el país ha dado serios pasos para corregir estas distorsiones.

2. Reformas de 1994 y pasos hacia la modernización

- 1.9 En 1994 se reforma la Constitución y se reconoce al Poder Judicial la facultad de nombrar su personal, fijar sus salarios y manejar su presupuesto. La agenda de reforma incluyó entre otras acciones: (i) crear un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que designe los Magistrados de la SCJ; (ii) radicar en la SCJ la facultad de nombrar jueces inamovibles, sentando las bases de la Carrera Judicial; y (iii) crear una instancia de estudios superiores para personal de carrera judicial. La reforma fue un paso decisivo hacia la autonomía judicial, pero su implantación práctica ha sido lenta. En 1996 se promulgó por Ley la autonomía financiera del Poder Judicial que le permite adecuar su planeación y ejecución presupuestaria, pero esta ley todavía requiere reglamentación para ser aplicada. En 1997 el CNM seleccionó la nueva SCJ, primer paso hacia profesionalizar el nombramiento de jueces; pero dado que la ley de Carrera Judicial no existe, el Ejecutivo seguirá llenando las vacantes que se produzcan. En la Jurisdicción de Tierras (JT), la modernización se encuentra más retrasada aún.

C. La Jurisdicción de Tierras

1. Su funcionamiento

- 1.10 La JT reproduce en su interior las limitaciones que afectan a todo el Poder Judicial y añade otras originadas en su propio diseño y práctica institucional. Aunque el sistema "Torrens" adoptado en 1920 es un mecanismo de transmisión de propiedad exitoso en otros países, su inoperancia en República Dominicana se origina en la excesiva "judicialización" del mismo y en rigideces en la ley que generan grave centralización y congestionan procesos que pudieran resolverse por vías no judiciales. Como muestra el diagrama, el sistema incluye mensura, levantamiento catastral, adjudicación y titulación; todo bajo el Tribunal Superior de Tierras (TST) que se apoya en tribunales locales, o "de Origen", y en 2 instituciones auxiliares: la Dirección General de Mensuras Catastrales (DGMC); y los Registros.

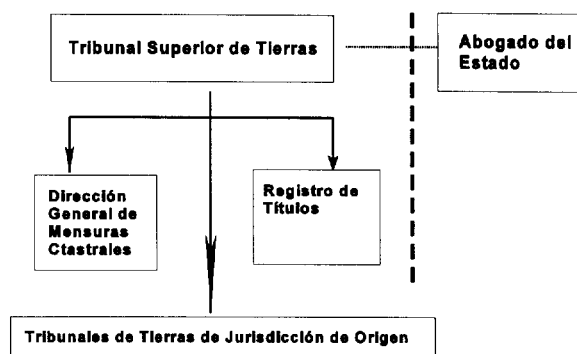


Diagrama 2: Rep. Dominicana. Estructura de la Jurisdicción de Tierras.

Dominicana se origina en la excesiva "judicialización" del mismo y en rigideces en la ley que generan grave centralización y congestionan procesos que pudieran resolverse por vías no judiciales. Como muestra el diagrama, el sistema incluye mensura, levantamiento catastral, adjudicación y titulación; todo bajo el Tribunal Superior de Tierras (TST) que se apoya en tribunales locales, o "de Origen", y en 2 instituciones auxiliares: la Dirección General de Mensuras Catastrales (DGMC); y los Registros. La causas del retraso institucional se evidencian en el funcionamiento de cada una de estas instancias

- 1.11 Los Tribunales de Origen efectúan los juicios donde por sentencia se establece la propiedad, conforme al principio de **legalidad**. Pero el TST debe revisar y aprobar cada fallo de los Jueces de Origen, y conocer cada apelación en su contra; lo que crea las bases del congestionamiento judicial. A esto se añade la inadecuada infraestructura, la desactualización geodésica y la debilidad del personal para producir un funcionamiento en extremo deficiente.
- 1.12 La DGMC efectúa los levantamientos que individualizan cada predio en un catastro jurídico, conforme al principio de la **especialidad** o singularidad de predios. Al promulgarse la ley vigente, se otorgó a la DGMC la función de regular la tecnología catastral a fin de mantener una alta confiabilidad cartográfica. Pero las técnicas y equipos vigentes entonces fueron incorporadas al texto de la ley, haciéndola rígida frente a avances tecnológico posteriores.
- 1.13 El Registro de Títulos inscribe las escrituras que consagran el derecho y emite un título con el cual el Estado garantiza tal derecho basado en un Fondo de Garantía que la ley establece, conforme al principio de **autenticidad**. Debe también mantener un sistema de custodia y verificación de documentos en atención al principio de **publicidad**, pero dada la rigidez de la ley las oficinas de registro no pueden hacer uso de técnicas mas eficientes de captura, custodia y acceso electrónico a la información.

- 1.14 El Abogado del Estado funciona como fiscal de tierras ante quien los ciudadanos pueden dirimir quejas por lesión de sus derechos. Sin embargo la centralización es tal que este único oficial se ocupa del país entero desde su oficina en Sto. Domingo.

2. Su financiamiento

- 1.15 Las distorsiones citadas entraban a una institución que, irónicamente, genera recursos mas que suficientes para una operación apropiada, como lo demuestra el análisis financiero (ver Archivo Técnico). La JT no tiene presupuesto definido, ya que éste se incluye en el presupuesto judicial que, como ya se indicó, apenas alcanza para salarios. Sin embargo, los impuestos generados por la JT superan año tras año el presupuesto total del Poder Judicial. Se estima que para 1996 la JT generará US\$16.7 millones; y que, una vez modernizada, requerirá un presupuesto anual de US\$6,2 millones, incluyendo el servicio del presente Préstamo.

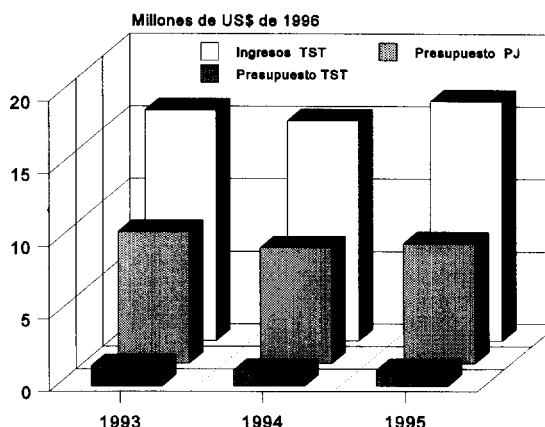


Figura 2: Rep. Dominicana. Ingresos y Gastos de la Jurisdicción de Tierras.

D. Conclusiones del análisis

1. Restricciones principales

- 1.16 El análisis muestra que la deficiente operación de la JT se asocia a distorsiones: (i) legales; (ii) tecnológicas; (iii) infraestructurales; y (iv) de recursos humanos.
- 1.17 Restricciones legales. Para manejar 2.5 millones de inmuebles la JT tiene el mismo marco legal de 77 años atrás, cuando en el país existían unas 250 propiedades. En cambio, en 1996 las transacciones alcanzaron 32.000 por US\$1.200 millones. Aunque la nueva Ley de Autonomía Financiera de 1997 concede iniciativa de gasto a la Judicatura frente a los otros poderes, no se la otorga a las jurisdicciones internas frente a la SCJ. El Fondo de Garantía fijado por ley para sustentar la propiedad es inoperante, lo que inhibe el mercado secundario de títulos. El exceso de judicialización y la sanción de métodos arcaicos generan rutinas ineficientes, como la escritura y costura manual de libros, que dificultan un inventario actualizado de títulos, producen acumulación de casos y una pobre atención a los usuarios.
- 1.18 Restricciones tecnológicas. La red geodésica que sirve de base a la definición de límites está desactualizada; lo que genera

incongruencias entre documentos y causa que el levantamiento catastral sea lento y caro. Los agrimensores usan herramientas anticuadas y la DGMC literalmente carece de equipos. Los anacronismos tecnológicos vigentes restan transparencia al proceso, lo hacen engorroso e incentivan la intermediación dolosa.

- 1.19 Restricciones de infraestructura. Décadas de insuficiencia presupuestaria han generado agudas limitaciones físicas, de mobiliario y equipos. El estado de los archivos es precario y no ofrece seguridad. Los Tribunales ocupan instalaciones inadecuadas a la majestad del acto judicial, a la discreción necesaria a los mismos y al acceso de los ciudadanos a la justicia. La penuria de recursos favorece la desorganización y la deficiencia documental, facilita la desaparición de documentos que substantian los derechos, y abre la puerta a la falsificación de títulos.
- 1.20 Restricciones de recursos humanos. El carácter político de los jueces resta honorabilidad al sistema, y con frecuencia se ignoran los criterios de elegibilidad de registradores, por lo que estos suelen no ser especialistas como requiere la función de fe pública que la ley les otorga. La falta de control es común: interesados cubren costos de jueces; agrimensores contratan sin supervisión los levantamientos; y empleados de registros son pagados por la Banca, generándose conflictos de interés e innumerables oportunidades al dolo y la corrupción. Las debilidades del régimen disciplinario contribuyen a un clima de relativa impunidad.

2. Estrategia del Banco y del Gobierno

- 1.21 El BID entiende que erradicar la inseguridad jurídica y proteger el derecho de los ciudadanos son requisitos básicos para que los sistemas de mercado sean gobernables. El Documento de País destaca como vector estratégico ayudar al país a superar el reto de la gobernabilidad con acciones para mejorar la rama judicial. El presente programa se inscribe en este esfuerzo de modernización en repuesta a la solicitud del GRD para un programa de titulación.

3. Concepto de la operación propuesta

- 1.22 Aunque se reconoce la urgencia de regularizar la tenencia, la conclusión del análisis y de las lecciones aprendidas es que no se podrá mejorar la situación mediante simple titulación, sin atacar las restricciones legales, de tecnología, de infraestructura, y de personal que dieron lugar originalmente al deterioro del sistema. Al contrario, se estima que un esfuerzo masivo de titulación en las condiciones presentes de excesiva judicialización, centralización, atraso tecnológico y grave déficit implicaría un riesgo inaceptable de complicar aún mas las distorsiones y exacerbar el entramamiento de los mercados. Por ello, en lugar de un programa de titulación, se enfatiza la necesidad de reorganizar la jurisdicción de tierras y se propone un programa orientado a modernizar la misma, con inversiones condicionadas, a la implementación por el país de las reformas institucionales necesarias al logro de los objetivos.

II. EL PROGRAMA, SUS COSTOS Y FINANCIAMIENTO

A. Objetivos

1. Propósito

- 2.1 El propósito de la presente operación es alcanzar una Jurisdicción de Tierras eficiente y transparente en su función de asignador y árbitro de la propiedad territorial. Se medirá la eficiencia y la transparencia en base a la celeridad que se alcance en la administración de justicia en materia de tierras, sin menoscabo de la seguridad jurídica del proceso.

2. Objetivos específicos

- 2.2 Los objetivos específicos de la operación son: (i) el reordenamiento legal e institucional necesario para que la jurisdicción cumpla con eficiencia y transparencia sus funciones; (ii) la actualización tecnológica de sistemas y procedimientos que sirven de asiento a las funciones; (iii) la adecuación de la infraestructura y el equipamiento a la majestad del acto judicial y a la seguridad de los registros; y (iv) el fortalecimiento de los recursos humanos para que puedan desempeñarse adecuadamente en el marco de la nueva estructura y sistemas de la jurisdicción.

B. Descripción

- 2.3 El Programa articula una estrategia de acciones de simplificación legal y modernización tecnológica, combinadas con la descentralización de la Jurisdicción de Tierras; esto último mediante la implantación de tres TST regionales y la adecuación de 26 tribunales de jurisdicción de origen. Para el logro de los objetivos arriba enunciados se incluyen componentes de: (i) reordenamiento legal e institucional; (ii) actualización tecnológica e informática; (iii) adecuación de infraestructura. mobiliario y equipo; y (iv) fortalecimiento de recursos humanos.

1. Reordenamiento Legal e Institucional (US\$1.739,7 miles)

- 2.4 El componente promoverá las medidas de carácter institucional y los instrumentos legales necesarios para que la Jurisdicción opere en forma eficiente y con el grado de autonomía necesario al logro de su autosuficiencia. El componente busca reducir los tiempos y costos de tramitación del saneamiento y titulación, simplificando los procedimientos y reduciendo el grado de su judicialización, cada vez que el acto judicial pueda sustituirse por procesos administrativos. Igualmente se busca mejorar las técnicas de administración de despacho, fortaleciendo simultáneamente la seguridad jurídica de los procesos. Dado que el análisis institucional ha mostrado como necesaria la descentralización, el componente incluirá asistencia técnica para el diseño, concertación e implantación del modelo de descentralización que más convenga al funcionamiento del sistema. El componente incluye acciones en dos

áreas principales: (a) reforma de la Ley de Tierras; y (b) organización administrativa de la Jurisdicción.

a. Reforma de la Ley de Tierra (US\$685,3 miles)

- 2.5 Se financiará asistencia técnica para la actualización de la Ley de Registro de Tierras y su legislación conexas, en forma tal que se adecúen la organización interna de la jurisdicción, los procedimientos y gestión de los despachos, el fondo de garantía de títulos y el régimen disciplinario al propósito de agilizar la administración de justicia de tierras, sin menoscabo de la transparencia y seguridad jurídica. Se proporcionará también asistencia técnica para que las normas de titulación y registro resultantes permitan la incorporación de tecnología moderna en mensura, levantamiento catastral, etc., y para que se desarrollen e implanten oportunamente los respectivos reglamentos.
- 2.6 Las consultorías a contratar específicamente revisarán y formularán las exposiciones de motivos y textos legales sobre los siguientes temas relativos a la Ley de Tierras:
- (i) Escenarios de organización/descentralización del sistema, tendientes a la desconcentración regional de los tribunales y las oficinas del Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierra, así como la Dirección de Mensura;
 - (ii) Normativa de gestión de despacho, incluyen las propuestas de reforma tendientes a reorganizar las responsabilidades y el flujo de trabajo, diferenciando y reasignando las responsabilidades relativas a: (i) la función jurisdiccional, radicada en los Magistrados y Jueces independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley; y (ii) la función administrativa que da soporte y apoyo a las áreas jurisdiccionales y que serían responsabilidad de divisiones administrativas.
 - (iii) Procedimientos de saneamiento, titulación y registro, incluyendo la propuesta de reforma a los mecanismos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de Tierras. Particular énfasis se pondrá en la agilización de estos procedimientos y en especificar la labor del Abogado del Estado de asegurar que se cumplan las regulaciones de otros ámbitos jurisdiccionales en materia de protección de reservas ecológicas y científicas, áreas ambientalmente frágiles, políticas sobre ocupación ilegal, etc.
 - (vi) Incorporación de tecnologías innovadoras y probadas, pertinentes a la mensura, catastro, custodia de documentos técnicos y legales y registro de títulos.
 - (v) Reforma a los derechos fiscales actualmente contemplados en el Capítulo XXIX de la actual Ley de Tierras y otras leyes que gravan las transacciones que se realizan con los derechos constituidos sobre los bienes inmuebles.

- (vi) Reforma del Fondo de Garantía indicado en el Capítulo XXV de la actual Ley de Registro de Tierras, cuya actualización puede sentar las bases del desarrollo de un mercado secundario de seguros de títulos de propiedad territorial.
- (vii) Reforma del Régimen Disciplinario de la Jurisdicción, a fin de crear el mecanismo necesario para la supervisión de funcionarios judicial y de jueces en su nueva condición de inamovilidad que les otorga la constitución de 1994.

b. Organización administrativa de la Jurisdicción
(US\$1.054,4 miles)

2.7 Las consultorías a contratar específicamente definirán y propondrán las actividades que se requieran para lograr el objetivo de fortalecer la capacidad gerencial, en los aspectos administrativos y financieros del Tribunal Superior de Tierras, dentro de los siguientes temas:

- (i) Estructura organizacional que el Tribunal Superior de Tierras requiere en el área administrativa, en general, y en el área de la administración presupuestaria, en particular, en un contexto de racionalización estratégica con la División Administrativa de la Suprema Corte de Justicia. Se incluirá la definición de los niveles de autoridad y responsabilidad que permitan obtener una mejor gestión presupuestaria de la institución.
- (ii) Administración de personal, que incluirá el análisis y evaluación de cargos y la descripción de funciones.
- (iii) Planeación, ejecución y control presupuestario, que incluirá el diseño de los sistemas y procedimientos con los correspondientes flujogramas y la elaboración de un esquema eficiente de planificación del presupuesto, identificando parámetros básicos de proyecciones, desarrollando el cronograma de elaboración del presupuesto interno e identificando los responsables de su desarrollo y ejecución. Diseño del sistema de control gerencial incluyendo, si fuese pertinente, una propuesta tendiente a la simplificación de los procedimientos y controles.
- (iv) Sistemas de información gerencial requerido para modernizar la gestión en materia: (i) financiera/presupuestaria; (ii) de personal; y (iii) de estadística judicial; este último con énfasis en la producción de información desagregada por género, estado civil, socio-económico, etc. y otros indicadores que permitan el seguimiento futuro del impacto social, de género etc. de los nuevos procedimientos, así como la publicidad y transparencia de los mismos.
- (v) Estrategia de comunicación para el diseño de re-ingeniería institucional y su ulterior implantación.

2. Actualización tecnológica e informática (US\$6.728,0 miles)

- 2.8 Con este componente se actualizará la red geodésica que sirve de base a los catastros, aportando la asistencia técnica, los equipos y el entrenamiento que sean necesarios a fin de corregir deslindes a nivel nacional y se efectuarán pruebas de levantamiento catastral en un área piloto, para evaluar experimentalmente la nueva tecnología catastral y el manejo de la información resultante. En la medida en que se adopten las modificaciones pertinentes en el marco legal del sistema, se modificarán las técnicas de mensura y deslinde incorporando tecnología moderna a los levantamientos catastrales, la titulación, el registro, la preservación y la transmisión de información sobre tenencia de tierra, en forma tal que los jueces y funcionarios agilicen sus trabajos y salvaguarden adecuadamente los documentos requeridos para el respaldo legal.
- 2.9 Se proveerá asistencia técnica y equipos a la Jurisdicción en general y a la DGMC en particular para modernizar los métodos y procesos que aseguren un sistema catastral eficiente, accesible y confiable. La actualización de la tecnología ayudará al TST en la regularización de la tenencia de la tierra, titulación y el registro de la propiedad. Se incluyen acciones en tres áreas: (a) infraestructura geodésica-catastral; (b) levantamiento catastral y (c) sistemas de información catastral jurídico.
- 2.10 Adecuación de la infraestructura geodésico-catastral Se financiarán las siguientes tareas: (i) mejorar la red nacional geodésica mediante la introducción del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que sirva de base a las actividades de levantamiento catastral llevadas a cabo por el sector privado y la cartografía del país; (ii) completar un estudio que ayudará a establecer la fundación para una nueva organización cartográfica en el país y la realización de nueva cartografía del territorio nacional; (iii) establecer en la Jurisdicción la capacidad técnica para manejar la nueva red GPS y proveer asistencia técnica al sector privado durante la ejecución del Programa; y (iv) realizar un programa de capacitación de los técnicos de DGMC, IGU y ICM.
- 2.11 Modernización del levantamiento catastral. Se financiarán las actividades de: (i) desarrollo de reglamentos más eficientes que incorporen tecnología moderna en los levantamientos catastrales y en la verificación de estos levantamientos por el DGMC; y (ii) capacitación de agrimensores privados y públicos en el país.
- 2.12 Modernización de los sistemas de información catastral/jurídico. En este rubro se incluye el desarrollo de un sistema unificado que integre la información: (a) catastral; (b) de control de gestión y estadística judicial; y (c) del archivo legal del TST. Se financiarán cinco actividades principales, a saber: (i) adquirir el equipo y proveer la asistencia técnica necesaria para implantar el sistema de información integrado en las nuevas oficinas de la JT; (ii) realizar la capacitación de los funcionarios de la Jurisdicción, incluyendo la DGMC, los Registros, la Oficina del Abogado del Estado y la Secretaría del TST en el uso de la

información y el manejo del nuevo sistema; (iii) organizar la información catastral para facilitar el proceso de titulación en el futuro; y (iv) ejecutar un programa de emergencia para obtener copias con "scanners" de alta velocidad del mínimo necesario de información básica disponible sobre saneamientos, titulación, y registro de la jurisdicción que se encuentran en grave peligro de pérdida o destrucción por el estado actual de los archivos del TST.

- 2.13 La consultoría correspondiente a esta última actividad examinará en detalle la información contenida en las fichas catastrales y la necesaria en los registros de la propiedad inmobiliaria, con el fin de crear el formato electrónico que mas convenga a la integración de los archivos del TST al sistema unificado de información
- 2.14 Con el fin de contribuir al mejoramiento de las tasaciones de la propiedad y el posible establecimiento futuro de un impuesto general a la propiedad, el componente comprende además un estudio para la actualización del catastro fiscal existente, actualmente dirigido por la DGCN, la conservación continua del mismo y la integración del catastro jurídico con el catastro fiscal.

3. Adecuación de infraestructura y equipos (US\$17.492,2 miles)

- 2.15 Mediante este componente se adecuará la infraestructura y equipamiento de la Jurisdicción de Tierras en: (i) el TST Central; los TSTs regionales y los tribunales de origen; (ii) las oficinas de Registro de la propiedad y la DGMC, para garantizar la colección, mantenimiento y custodia adecuada de documentos de soporte de la propiedad y otros derechos sobre bienes inmuebles, así como el acceso público a la información pertinente. Con este fin se dotará al Sistema, a nivel central y de región catastral, de instalaciones físicas adecuadas y mobiliario funcional, así como de equipo y materiales requeridos por sus funciones.
- 2.16 El componente prevé el desarrollo de diseños arquitectónico, de ingeniería civil, a fin de responder flexiblemente al modelo de descentralización a ser adoptado. El componente incluye dos áreas: (a) edificios e instalaciones; y (b) mobiliario y equipamiento.

a. Edificios e instalaciones (US\$14.290,9 miles)

- 2.17 El programa financiará los diseños ejecutivos ^{1/} y la rehabilitación o construcción de las edificaciones a nivel central, regional y de jurisdicción original necesarias al funcionamiento descentralizado del sistema, conforme a los requerimientos de espacio, funcionalidad y número establecidos. El diseño definitivo de las obras a rehabilitar o construir de nueva planta se realizará tomando en cuenta tanto las demandas presentes como las del futuro previsible, en cada una de las diferentes unidades del sistema y,

^{1/} En el archivo técnico del proyecto se encuentran los términos de referencia para la consultoría a cargo del desarrollo de los diseños ejecutivos.

específicamente, en base a las actividades que se llevan a cabo en las instalaciones de la Jurisdicción y teniendo en cuenta las que se eliminen o modifiquen con motivo de la simplificación prevista.

- (i) Remodelación del edificio sede. Se financiarán las modificaciones al edificio sede de la jurisdicción que aloja el TST, la DGMC y el resto de las dependencias centrales del sistema, rehabilitando las instalaciones y dotándolas de mobiliario y equipo adecuado. La remodelación incluye las instalaciones de 6 tribunales de jurisdicción original y el Registro del Distrito Nacional, ubicados en el edificio del TST. Las modificaciones incorporarán la infraestructura física necesaria para que, en adición a las funciones jurisdiccionales de titulación y registro propias de la Jurisdicción, también se puedan realizar las complementarias de administración (contabilidad, recursos humanos, finanzas, vigilancia, servicios y parqueo).
- (ii) Construcción de infraestructura regional. Se financiarán inversiones con arreglo a la zonificación establecida de las diferentes unidades arquitectónicas, así como a la relación de los locales que se requieren para cada dependencia del sistema, dentro del modelo de descentralización adoptado, y atendiendo en cada caso a las previsiones de orientación, iluminación y salvaguarda necesarias. Se contempla: (i) la construcción y equipamiento de 3 oficinas regionales del TST conforme al diseño modular designado como (M2) 2/, que incluye instalaciones regionales de la DGMC, del Registro de Títulos y del Tribunal de Jurisdicción de Origen correspondiente a la sede regional; y (ii) la adecuación de 17 Tribunales de Jurisdicción de origen conforme al diseño modular designado como M1, el cual incluye la oficina de Registro correspondiente. De éstos, 15 tribunales se instalarán en nuevas construcciones y 2 serán solo equipados en edificaciones ya disponibles.

b. Mobiliario y equipo menor (US\$3.201,1 miles)

- 2.18 Dentro del componente se financiará la compra e instalación del mobiliario y equipo requerido para un funcionamiento apropiado de las oficinas, así como para el mantenimiento de un sistema de archivo de datos confiable, de fácil acceso y actualización, y que brinde las condiciones de seguridad que el sistema requiere.

4. Fortalecimiento de los recursos humanos (US\$799,1 miles)

- 2.19 Además de las acciones de capacitación tecnológica incluidas en el componente 2 del programa, mediante el presente componente se

2/ En el archivo técnico del proyecto se incluye el listado con la especificación y localización regional de los Módulos identificados.

financiará la capacitación y entrenamiento del personal de todas las dependencias de la Jurisdicción que se requiera para implantar adecuadamente y consolidar las transformaciones legales, institucionales y administrativas que ocurran como consecuencia del Programa. Igualmente el componente incluye la divulgación de estas transformaciones a los usuarios de la Jurisdicción y el público en general.

a. Capacitación (US\$285,0 miles)

- 2.20 Se financiará el diseño, organización y ejecución de un programa de capacitación del personal de registros, tribunales y otras dependencias de la jurisdicción, así como la oficina del Abogado del Estado, destinado a fortalecer la capacidad y calidad profesional de los recursos humanos del sistema. Este programa incluirá tanto eventos especiales de capacitación, como la modalidad de entrenamiento en servicio.
- 2.21 Eventos de capacitación. Estos serán de dos tipos: (i) de **motivación personal y desarrollo humano**, destinados a elevar la mística de trabajo de la Jurisdicción, la autoestima y el deseo de superación en sus funcionarios que posibiliten un mejor aprovechamiento de los cambios institucionales, incluyendo el tema de la administración de personal y el régimen disciplinario, acorde con las responsabilidades de los funcionarios y con la eventual ley de carrera judicial; y (ii) de **capacitación técnica** en los aspectos substantivos de las nuevas normas y procedimientos que se implanten a fin de mejorar la eficiencia. Se diseñarán talleres modulares para cada área y nivel de entrenamiento; los mismos que se repetirán tantas veces como sea requerido por las necesidades de entrenamiento.
- 2.22 Entrenamiento en servicio. Se financiará un programa capacitación de capacitadores que luego diseminará sus conocimientos mediante entrenamiento en servicio, tomando como base los procesos reales de levantamiento catastral, saneamiento, titulación y registro de la propiedad, conforme a los procedimientos reformados.

b. Programa de Divulgación (US\$514,1 miles)

- 2.23 Se financiará un programa de divulgación dirigido a los usuarios del sistema a fin de dar a conocer las nuevas modalidades de funcionamiento y las formas de acceso a su servicio, reforzando la transparencia y carácter público de los nuevos procedimientos, que aseguren el respeto al derecho de los individuos sin diferencia de sexo o status socio-económico.
- 2.24 Las acciones de divulgación tendrán dos vertientes, a saber: (i) el desarrollo de un servicio permanente de información y orientación al usuario en las oficinas de la Jurisdicción; y (ii) el desarrollo de una campaña nacional, amplia pero restringida en el tiempo, a fin de divulgar los beneficios de la reforma, especialmente a la población con menos acceso al sistema.

2.25 Sistema de Información y orientación al usuario Se financiarán consultorías y acciones de capacitación para dotar a un cuerpo de funcionarios con las habilidades y conocimientos suficientes para servir de interface "oral" con usuarios del sistema en cada una de las oficinas de la jurisdicción, a fin de orientar a aquellos en materia de pasos, procedimientos y derechos asociados al nuevo entorno legal de la Jurisdicción. Este cuerpo estará a cargo de diseminar los conocimientos a otros funcionarios que puedan sustituirlos en esa función. Se efectuará el diseño organizacional del servicio de modo tal que no implique ampliación de la planta de personal de la Jurisdicción y se le dotará de material impreso de divulgación sobre los aspectos relevantes a esta función de orientación al público.

2.26 Campaña nacional de divulgación. Se efectuará una campaña pro-activa de diseminación de los nuevos procedimientos instituidos por la Jurisdicción de Tierras. La campaña incluirá acciones de educación sobre la importancia de los temas de género en relación a la tenencia de la tierra y la toma de conciencia, sobre todo por parte de la población de menores ingresos, menor educación y mas barreras de acceso a la justicia, sobre sus derechos al título de propiedad y los medios a su disposición para formalizar dicho título. Con este propósito se diseñarán manuales e instructivos explicativos del funcionamiento del sistema; de cómo acercarse a las instituciones del mismo; sobre la documentación y costos requeridos en cada fase del proceso, etc. La campaña hará uso intensivo de medios masivos de comunicación de profundo alcance en la población objetivo, así como de organizaciones no gubernamentales con amplia experiencia de trabajo con dicha población.

C. Dimensionamiento

2.27 Para dimensionar el programa se tuvo en cuenta diversos escenarios estratégicos de modernización, adoptándose un modelo que combina la descentralización del sistema con un estrategia de simplificación legal e institucional que permite minimizar las inversiones en infraestructura y tecnología, obteniéndose el mismo o mayor impacto en materia de eficiencia en el uso de recursos, sostenibilidad del sistema y calidad del servicio resultante.

D. Costo y financiamiento

2.28 El costo total del Programa asciende al equivalente de US\$40,0 millones, de los cuales US\$32,0 millones provendrían del préstamo del Banco propuesto, con recursos del Capital Ordinario, de los cuales US\$20,3 millones estarían bajo subsidio de intereses por la Facilidad de Financiamiento Intermedio; y US\$8,0 millones provendrían del Gobierno de la República Dominicana, como contrapartida local, de acuerdo al siguiente detalle.

COSTO TOTAL DE PROGRAMA (Miles de US\$)			
CATEGORÍA DE INVERSIÓN	LOCAL	OC	TOTAL
1. Ingeniería y administración	1.911	4.499	6.410
- Reordenamiento Legal e Institucional	0	0	0
- Actualización Tecnológica y Catastral	0	52	52
- Adecuación de la Infraestructuras y Equipos	735	735	1.470
- Fortalecimiento de los Recursos Humanos	0	0	0
- Unidad Ejecutora	1.176	3.712	4.888
2. Costos directos	2.530	17.061	19.592
- Reordenamiento Legal e Institucional	0	0	0
- Actualización Tecnológica y Catastral	534	2.985	3.519
- Adecuación de la Infraestructuras y Equipos	1.996	14.026	16.022
- Fortalecimiento de los Recursos Humanos	0	0	0
- Unidad Ejecutora	0	50	50
3. Costos concurrentes, incrementales	1.927	4.019	5.946
- Reordenamiento Legal e Institucional	696	1.044	1.740
- Actualización Tecnológica y Catastral	631	2.526	3.157
- Adecuación de la Infraestructuras y Equipos	0	0	0
- Fortalecimiento de los Recursos Humanos	599	200	799
- Unidad Ejecutora	0	250	250
Sub total	6.368	25.580	31.948
Sin asignación específica	1.027	2.767	3.794
Intereses	0	3.333	3.333
Comisión de crédito	605	0	605
Inspección y vigilancia	0	320	320
TOTALES	8.000	32.000	40.000

2.29 El plazo de amortización del préstamo sería de 25 años, con 4 años de gracia y 4 años para el periodo de desembolso. La tasa de interés será variable, al nivel estándar aplicado por el Banco a los fondos del Capital Ordinario. La contrapartida local provendrá del Gobierno Central en carácter de aporte de capital a la Suprema Corte de Justicia.

III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. Esquema de ejecución

1. Modalidad de ejecución

- 3.1 La operación se concibe como un programa de inversiones basado en reformas institucionales y de política en el sector justicia. Las acciones estarán asociadas a requisitos de reordenamiento que permitan a la Jurisdicción operar en un marco legal adecuado y recobrar su carácter de autoridad jurisdiccional, presupuestaria y administrativamente independiente. Se supervisará la ejecución mediante revisiones anuales de seguimiento, a fin de verificar avances, conforme a lo establecido en la matriz de requisitos de políticas y reformas que se presenta en el Anexo de Reformas Legales incluido en el Archivo Técnico del Proyecto.

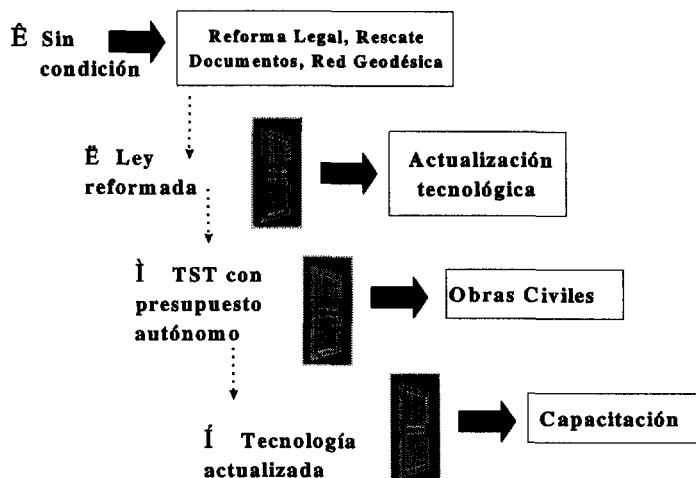


Figura 3. Requisitos y secuencia de ejecución

- 3.2 La matriz citada, prescribe la secuencia de acciones e inversiones a seguir, basadas en el cumplimiento de condiciones que se ilustran en la Figura 3. Se especifican a nivel de sub-componentes y actividades los desembolsos que podrían adelantarse sin condición previa, en apoyo a la reforma; y aquellos que estarán sujetos a: (i) la aprobación de una nueva Ley de Registro de Tierras; (ii) la creación del Departamento Administrativo del TST; y (iii) la adopción en los reglamentos y procedimientos de ley de tecnologías actualizadas de mensura, captura y almacenamiento de información catastral, de archivo y de gestión de despacho y estadística judicial. El Ejecutor preparará un informe anual sobre el progreso de las reformas a ser discutido con el Banco en las revisiones anuales de seguimiento del Programa.

2. Organización para la ejecución

- 3.3 Ejecutor y prestatario. La Suprema Corte de Justicia será el Organismo Ejecutor del Programa, responsable por su dirección general. El prestatario en nombre de la República será el Ejecutivo Nacional, el cual a su vez será el responsables de proveer los recursos de contrapartida local de la operación, así

como de traspasar los recursos del Préstamo al Ejecutor mediante convenio formal de transferencia.

- 3.4 Unidad Ejecutora. La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) será creada por resolución de Sala de la Corte Suprema de Justicia, quien nombrará su Director Ejecutivo y supervisará sus funciones. Como se ilustra en el Diagrama 3, se prevé la constitución de una comisión asesora de la SCJ incluyendo representantes de los tres poderes del Estado, a fin de que colaboren en la dirección política y decisiones de alto

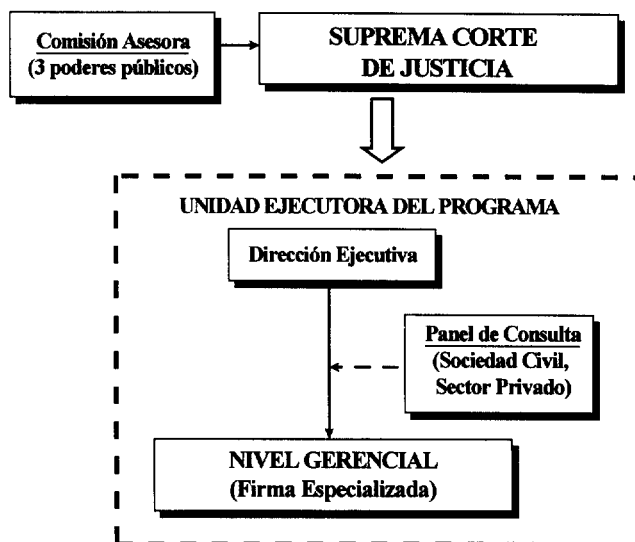


Diagrama 3: Organización para la ejecución

nivel sobre la operación. Para conducir el día a día de la ejecución se contratará, mediante licitación pública internacional, una gerencia profesional especializada que garantice imparcialidad, eficiencia administrativa y la mas alta calidad técnica en el Programa.

- 3.5 A fin de dotar a la UEP de una instancia de concertación controlada con el sector privado y la sociedad civil, se establecerá un Panel de Consulta con miembros selectos de asociaciones, gremios, ONGs, etc. vinculados al tema para que asesoren a la UEP en materias sustantivas y que sirva de foro previo de debate de las acciones de reforma, antes de que éstas sean sometidas a la plena consideración del legislador..El esquema de ejecución al que se refiere este párrafo y los anteriores 3.3 y 3.4 ha sido aceptado por el Poder Ejecutivo y la SCJ.

B. Lineamientos específicos de ejecución por componente

- 3.6 Los servicios técnicos y de consultorías que se mencionan en cada componente se ejecutarán de acuerdo a términos de referencia que han sido revisados por el Banco y constan en el archivo técnico del Proyecto. En concordancia con lo establecido en la Matriz de Políticas y Reformas del Anexo de Ejecución del Programa, incluido en el Archivo Técnico del Proyecto, se han identificado acciones e inversiones cuya justificación requiere un entorno jurídico específico, decisiones de política o la implantación de reformas en curso. A continuación se señala cuando la adquisición de bienes o servicios de alguna porción del Programa requiere la aprobación formal del requisito institucional, de política o de reforma que

corresponda.

1. Componente de Reordenamiento Legal e Institucional

- 3.7 La ejecución de las actividades asociadas a la Reforma de la Ley de Tierra no requiere un entorno jurídico e institucional específico. No obstante, las concernientes a **la organización administrativa de la jurisdicción requiere que el marco legal (Ley y reglamentos) se haya reformado** para que, en coordinación con la División Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, pueda reasignarse la función administrativa dentro de la Jurisdicción a profesionales con responsabilidad de planeación, gestión y control presupuestario, administración de personal y servicios de apoyo a la función jurisdiccional; así como la operación y mantenimiento de las instalaciones físicas y sistemas de información de la Jurisdicción.

2. Componente de Actualización Tecnológico e Informática

- 3.8 **La modernización de la tecnología de mensura y sistemas informáticos y su "interface" con el registro de la propiedad territorial, los despachos judiciales, etc, incluyendo las acciones de entrenamiento y capacitación, requiere que el marco legal pertinente al proceso de mensura, registro y titulación de la propiedad permita el uso de las tecnologías, métodos, prácticas y procedimientos que se adoptarían con recursos del programa.** Debido a esto, la ejecución de las mencionadas acciones dentro del Programa dependerá de la aprobación y promulgación del marco legal pertinente, a satisfacción del Banco y las autoridades nacionales, con la excepción de las labores de rescate electrónico de los archivos del TST en peligro de pérdida, la actualización de la red geodésica y las consultorías necesarias para revisar y reformar los reglamentos pertinentes.

3. Componente de Adecuación de Infraestructura, Equipos y Sistemas

- 3.9 La ejecución de este componente, con excepción de los estudios destinados a desarrollar los diseños ejecutivos de las obras civiles, requerirá garantías de un manejo apropiado de la inversión, así como su mantenimiento, reparación y reposición oportuna. Para asegurar esta condición, **se requerirá que la nueva Ley de Registro de Tierras establezca el Departamento Administrativo en el TST.**
- 3.10 Resuelto lo anterior, en el caso de las obras civiles/construcciones/modificaciones, se requerirá adicionalmente que previo a la convocatoria de las licitaciones se haya demostrado a satisfacción del Banco la propiedad por el Estado Dominicano de los inmuebles en que se realizarán aquellas.

4. Componente de Fortalecimiento de Recursos Humanos

- 3.11 La ejecución de las actividades de capacitación y divulgación previstas en este componente, dependerá de que se hayan adoptado las actualizaciones tecnológicas y de procedimientos en los nuevos reglamentos que rijan a la Jurisdicción.

C. Recuperación de costos

1. Tasas, tributos y recursos especializados

- 3.12 La Jurisdicción de Tierras controla por ley un sistema de tributos asociados a los servicios que presta. Este sistema se basa en impuestos a la propiedad y a las transacciones inmobiliarias, incluyendo gravámenes sobre sucesiones y donaciones, e impuestos a la vivienda suntuaria y a los solares urbanos. El monto anual recaudado por concepto de estos tributos permite con creces la recuperación de los costos de operación de la Jurisdicción de Tierras, incluyendo el de las presentes inversiones, así como de otras instancias del Poder Judicial; lo que hace de aquella un generador neto de recursos dentro del sistema de justicia. Se entiende que las reformas legales e institucionales propugnadas por el presente programa contribuirán a dar agilidad y transparencia a las funciones de la jurisdicción, reduciendo el fenómeno subyacente de la sub-valoración de predios con fines de evasión, que deprime los ingresos. Las reformas propugnadas igualmente consolidarán el mecanismo de asignación de recursos necesario para la adecuada recuperación de los costos.

2. El mecanismo de presupuestación y asignación de recursos

- 3.13 Los recursos generados por el sistema de tributos de la Jurisdicción no son recaudados directamente por ésta, sino que se captan a través de las agencias recaudadoras del Gobierno y son asignados mediante el proceso central de presupuestación pública. Si bien el Programa no propugna la captación directa de recursos por la Jurisdicción, las autoridades de la SCJ promoverán la reforma de la Ley de Registros de Tierras para establecer un Departamento Administrativo en la Jurisdicción de Tierras.

D. Período de ejecución y desembolsos

- 3.14 Para la ejecución del Programa se contempla un periodo de cuatro años a partir del primer trimestre de 1998. De acuerdo con las estimaciones de ejecución efectuadas, y considerando la secuencia de las condiciones o "triggers" correspondiente a cada componente el cronograma previsto de desembolsos por categoría de inversión sería el siguiente:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR COMPONENTE (Miles de US\$)					
COMPONENTE	AÑO I	AÑO II	AÑO III	AÑO IV	TOTAL
Reordenamiento legal e institucional	348	1.392	0	0	1.740
Actualización tecnológica y catastral	336	1.346	2.691	2.355	6.728
Adecuación de la infraestructura y equipos	0	875	7.872	8.746	17.492
Fortalecimiento de los recursos humanos	0	200	240	260	799
Unidad ejecutora del programa, UEP	1.297	1.297	1.297	1.297	5.188
Sin asignación específica	216	593	1.414	1.569	3.794
Costos financieros	345	608	1.195	2.110	4.258
TOTAL	2.544	6.310	14.709	16.437	40.000

E. Transferencia de recursos y fondo rotatorio

- 3.15 Para los fines del Programa, el Ejecutor mantendrá en el Banco Central la cuenta en la que se depositarán los recursos provenientes del financiamiento del BID y para el aporte local mantendrá la cuenta correspondiente en el Banco de Reservas. A fin de que el Ejecutor cuente en forma oportuna con recursos del financiamiento para cubrir obligaciones derivadas de las actividades del Programa, se recomienda la constitución de un Fondo Rotatorio para uso de la SCJ, por hasta el 5% del monto del préstamo.
- 3.16 A fin de cumplir con lo anterior y en atención a lo dispuesto en el párrafo 3.3 del presente documento, el Prestatario firmará un convenio de transferencia de fondos al Ejecutor que especifique un mecanismo ágil para dicha transferencia y garantice la oportuna asignación de recursos para la ejecución del Programa. La firma de este convenio constituirá una condición previa al primer desembolso del préstamo.

F. Operación y mantenimiento

- 3.17 En los diseños arquitectónicos se han previsto las instalaciones necesarias para el mantenimiento diario y periódico que se requiere, tanto en la infraestructura como el equipo y mobiliario. El personal necesario deberá ser capacitado para que pueda proporcionar el servicio que demanda el funcionamiento de unas instalaciones modernas y eficientes. Con lo anterior se busca que el servicio público que se proporcione en las instalaciones, además de ser de alta eficiencia, se desarrolle con la mejor imagen posible, tanto fuera como dentro de las edificaciones.
- 3.18 En lo referente a los costos concurrentes que tal tipo de atención ocasionará no se prevé problema, toda vez que los ingresos que se generan por concepto de derechos por titulación y registro de propiedades inmobiliarias pueden cubrir satisfactoriamente los costos de operación y mantenimiento que se originen con el sistema modernizado. El ejecutor se compromete a operar y mantener las edificaciones, mobiliario y equipo que se incorporen en el Programay a presentar planes anuales de mantenimiento de acuerdo a las condiciones contractuales estándar del Banco. También se incluirá en los términos de referencia de la firma especializada a contratar para la gerencia de la UEP la responsabilidad por hacer el seguimiento y asesorar en las actualizaciones que se tengan que hacer al Plan.

G. Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios

- 3.19 La adquisición de bienes y servicios que demande la ejecución del Programa se realizarán siguiendo las normas y políticas estándares del Banco.
- 3.20 Los montos a partir de los cuales las adquisiciones de bienes del Programa requerirán licitación pública internacional serán US\$ 350,000. En el caso de obras civiles la licitación pública internacional se celebrará cuando el presupuesto sea igual o mayor a US\$1.500.000. Se hará concurso público internacional para consultorías a partir de US\$200.000. Se requerirá pre-calificación para las licitaciones de obras por un monto igual o mayor a US\$1.500.000.

H. Mecanismo de seguimiento y supervisión

- 3.21 Para el seguimiento y supervisión de las labores a realizar por el Programa, se contempla que la UEP establezca un sistema de información ágil y sencillo que contenga las variables más relevantes para hacer el debido control sobre la ejecución del Programa, tomando en cuenta el Marco Lógico presentado en el Anexo I al presente documento. Dicho sistema debe ser administrado por la Gerencia de la UEP, quien tendrá a su cargo producir un Informe Anual de seguimiento a ser sometido al Banco antes de la reunión anual de revisión. Este informe deberá hacer énfasis en el progreso obtenido en cumplir los requisitos de ejecución

establecidos en la matriz de políticas y reformas e incluirá un reporte sobre la ejecución presupuestaria de la Jurisdicción del año anterior y el presupuesto proyectado para el año siguiente.

- 3.22 Se contemplan misiones de seguimiento del Banco, durante el último trimestre de cada año de ejecución, que tendrán la responsabilidad de revisar el avance del Programa durante el año precedente y la programación de las actividades del nuevo año, sobre la base del avance logrado en las reformas institucionales. En el primer año se añadirá una misión al inicio de la ejecución, que tendrá a su cargo acordar el plan de trabajo con que se lanzará el programa.
- 3.23 El ejecutor presentará anualmente estados financieros del proyecto, debidamente dictaminados por una firma de contadores públicos independientes aceptables para el Banco, durante el periodo de ejecución.

I. Evaluación del Programa

- 3.24 No obstante que el alcance del monitoreo será global, la evaluación del Programa, a ser realizada por el Banco dentro de los cinco años posteriores a la ejecución del proyecto, se basará en una muestra de organismos de la jurisdicción de tierras. La formulación de una matriz de indicadores basada en la metodología de marco lógico utilizada por el banco dará continuidad a la evaluación del Programa.
- 3.25 Conforme a la meta de descentralización de la Jurisdicción de Tierras, la función de monitoreo y evaluación de los indicadores del marco lógico se concentrará en la oficinas nacionales y regionales de la jurisdicción, quedando como responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Programa en Santo Domingo la integración y sistematización de la información. Se pondrá especial énfasis en los indicadores de operaciones del mercado inmobiliario, financiamiento hipotecario, incremento de sentencias y expediciones de título de propiedad, y al número de mensuras y levantamiento catastrales con nuevas tecnologías.

IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

- 4.1 El logro del propósito del presente proyecto, expresado en 2.1, contribuiría a beneficios indirectos asociados a fines mas generales como los de: (i) promover una mayor seguridad jurídica en la tenencia de tierra para propietarios e inversionistas; (ii) incentivar una mayor movilización de recursos de financiamiento para fines productivos y el desarrollo del mercado inmobiliario, al mejorar las garantías para los préstamos hipotecarios; y (iii) propiciar la introducción de tecnologías que mejoren la productividad agrícola. (Ver Marco Lógico en Anexo I). Como resultado del Proyecto, la obtención del certificado inmobiliario debe resultar de un trámite sencillo, seguro y respaldado por técnicas modernas de control.

A. Viabilidad técnica

- 4.2 El número de funcionarios profesionales envueltos en las tareas técnicas dentro de la estructura de la Jurisdicción es suficiente. Se ha establecido, además, que este personal posee la experiencia y habilidades necesarias para asistir en la ejecución de las actividades previstas en el Programa. No obstante, existe una debilidad crítica en la instituciones involucradas y su staff en lo que se refiera a la transformación de los sistemas y procedimientos existentes. En consecuencia, se requiere un sólido entrenamiento técnico y procedimental, la transferencia de tecnología e ideas innovativas y una inversión razonable en equipos modernos para aumentar la capacidad del personal. El presente programa incluye acciones e inversiones en las áreas citadas.
- 4.3 Específicamente en el área de modernización judicial, de manejo de información de registro y propiedad y de levantamiento catastral, el Programa enfatizará el uso de tecnología de manejo automático de documentación para rescatar registros esenciales en peligro de pérdida y la introducción de tecnología innovativa, aunque manejable, en la rutina diaria del TST y de los agentes privados asociados a la Jurisdicción. A fin de asegurar el éxito de esta tecnología, el Programa enfatiza una sólida presencia de experticia internacional para asistir técnicamente en el proceso de su introducción. Esta asistencia será combinada tanto con inversiones de entrenamiento en funciones, como con el financiamiento específico de US\$800,000 para establecer un currículum de alto nivel y ejecutar un programa de entrenamiento en catastro. El entrenamiento incluye fondos para tres becas de post-grado y becas de entrenamiento en la nueva tecnología para aproximadamente 200 agrimensores públicos.

B. Viabilidad ambiental

- 4.4 El programa propuesto no incluye acciones de titulación de propiedades rurales o urbanas, y por tanto no tendrá el tipo de efectos directos positivos o negativos en materia de calidad ambiental e impacto social normalmente asociados a proyectos donde se otorgan títulos sobre la tierra y se formalizan derechos de propiedad. Sin embargo, al promover una Jurisdicción de Tierras

legal, técnica y administrativamente sólida, el Programa abre la oportunidad para implantar medidas específicas, completar estudios y desarrollar recomendaciones que reduzcan el impacto negativo de futuras acciones de titulación y profundicen los beneficios asociados a una titulación de propiedad segura y transparente. La inclusión de tales actividades en el Programa garantiza que las condiciones apropiadas estén en su lugar cuando se produzca un esfuerzo masivo de regularización de tenencia, como el país requiere.

- 4.5 La Ley de Tierras en República Dominicana es una ley de naturaleza procesal, que versa solo sobre el procedimiento de formalización de las documentación de propiedad, y no sobre los temas de derecho sustantivo subyacentes. Por consiguiente no compete a esta ley establecer condiciones para la regulación del uso de la tierra, ni ser el asiento de políticas de regularización de tenencia. No obstante, el sistema estipulado por la ley define la Oficina del Abogado del Estado como una instancia de revisión y concertación de los actos procesales del TST con las leyes sustantivas en materia de derechos de la sociedad y los individuos, protección del medio ambiente, reforma agraria, etc. y con las políticas de Estado en materia de uso del territorio nacional y sus recursos. Igualmente, la ley privilegia el principio de la "publicidad" de la titulación, lo cual es una obvia condición de acceso a la justicia con importantes implicaciones de impacto social en amplios sectores de población. En este contexto, las acciones del Programa fortalecerán tales áreas de interface con los aspectos sustantivos mencionados.
- 4.6 Medidas legales. La reforma de la Ley de Tierras descentralizará y agilizará el proceso de registro de la propiedad. Estos cambios se focalizarán específicamente en permitir a aquellos sectores sociales tradicionalmente excluidos de los beneficios de una titulación segura por razones de costo, sofisticación legal, lentitud y centralización de las diligencias, falta de transparencia procesal y ausencia de información oportuna. La nueva ley y sus reglamentos serán sometidos, en la fase de anteproyecto, a la concertación con la sociedad civil, incluyendo ONG's de amplio raigambre social de base, a fin de asegurar la participación de los afectados. La adopción del nuevo marco legal será condición de desembolso de importantes inversiones del Programa en adecuación tecnológica y de infraestructura.
- 4.7 Medidas institucionales. Se prevé el apoyo a la función supervisora en materia ambiental, social y de interés público del Abogado del Estado, mediante un estudio que determine las necesidades de personal, desarrolle recomendaciones de política e identifique la asistencia técnica e inversiones necesarias para fortalecer el rol de esta oficina. El programa incluye US\$75.000 para completar dicho estudio.
- 4.8 Inversiones específicas. El Programa contempla también las siguientes inversiones de impacto ambiental y social indirecto: (i) **Sistema de información Catastral Jurídico** que incluye el inicio de un sistema de información basado en predios, compatible con la base

de datos sobre recursos naturales actualmente en desarrollo por la Secretaría de Agricultura. Este sistema integrará también un mecanismo de gestión de despacho y estadísticas de los actos judiciales desagregadas de tal modo que pueda posteriormente evaluarse el impacto de género, por grupos de ingreso, nivel de educación, etc. de la modernización del sistema, (US\$500,000); (ii) **Campaña de divulgación** a nivel nacional orientada a diseminar información sobre la eventual nueva ley de tierras y sus reglamentos, y las implicaciones en términos de mecanismos de acceso a la justicia por amplios sectores sub-privilegiados de población. La campaña se focalizará, sin excluir otros grupos, en los sectores de menores recursos, las mujeres, la población campesina y la de mayor índice de analfabetismo y menor nivel de educación, mediante la incorporación de ONGs que trabajan con estos grupos. Las acciones serán complementada con el desarrollo de un mecanismo permanente de información al usuario en las oficinas de la JURISDICCIÓN, que incluya capacidad de orientación verbal, así como material impreso divulgativo de las normas, procedimientos y derechos legales (US\$445,000)

- 4.9 Participación de la Mujer Las reformas jurídicas e institucionales que se propongan en el contexto del Programa tomarán en cuenta los derechos legales y consuetudinarios de la mujer e hijos sobre la tierra, especialmente en los casos en que la pareja viva en concubinato o matrimonio de ley común, o en que la mujer sea cabeza de hogar. Se identificarán disposiciones que salvaguarden su status como sujeto de todos los derechos reales asociados; las provisiones que faciliten una sucesión ordenada; los indicadores sobre tenencia desagregados por género y status marital que permitan evaluar el impacto de género de las reformas; y las acciones de educación y divulgación sobre la importancia de los temas de género en materia de tenencia de la tierra.
- 4.10 El presupuesto total asignado en el Programa para garantizar efectos indirectos positivos y mitigar los negativos en materia social y ambiental es de US\$1,27 millones. Existe una razonable expectativa de que el Programa incentive indirectamente la conservación y el mejor manejo de los recursos suelo y agua en la medida en que el acceso a un título confiable de propiedad estimule la mejora de suelos, la mitigación de la erosión y en general el uso mas eficiente de los recursos asociados a la tierra. Las inversiones futuras gozarían de mayor seguridad jurídica y, al impactar la productividad agrícola, contribuirían a mejorar los ingresos de los pequeños propietarios y su nivel de vida.

C. Viabilidad institucional y financiera

- 4.11 El Programa propuesto se inscribe en el esfuerzo general de mejoramiento del sistema de justicia del país y su éxito dependerá en última instancia del avance de la reforma del sector en su conjunto, especialmente en sus instancias superiores como la SCJ y en sus instrumentos centrales como la Ley de Carrera Judicial, la Escuela de la Magistratura, etc. Sin embargo, el carácter especial de la Jurisdicción de Tierras y la naturaleza urgente y particular de la problemática que enfrenta, amerita una intervención

especializada, distinta de las otras previstas o en ejecución por el Banco en el sector.

4.12 El marco constitucional vigente desde agosto de 1994 posibilita el desarrollo de las actividades de modernización previstas en el Programa. Existe en el país la capacidad y experiencia profesional en el ámbito jurídico requerida para llevar a cabo las revisiones y transformaciones en el marco legal e institucional necesarias al logro de los objetivos de modernización planteados. Existe también disposición en el sector privado, especialmente el financiero y agroempresarial, a prestar apoyo al proceso de modernización; así como amplio consenso en los diversos sectores de la vida nacional sobre la necesidad de sanear el sistema de registro y titulación, y modernizar la jurisdicción de tierras; todo lo cual otorga una amplia base de sustentación social al presente programa.

4.13 La cifras del estudio financiero muestran la sostenibilidad financiera de las acciones e inversiones del Programa, siempre y cuando se asignen los recursos necesarios y se otorgue autonomía presupuestaria a una Jurisdicción que por sí sola genera ingresos casi suficientes para la operación y mantenimiento adecuados de todo el Poder Judicial. El otorgamiento de esta autonomía presupuestaria será condición para el desembolso de la mayoría de las inversiones físicas y en equipos que requieren mantenimiento y reposición. En la medida en que se incremente la transparencia, se reduzca la sub-valoración de predios y se mejore la eficiencia del sistema, es esperable que los ingresos generados aumenten como resultado de las acciones del Programa.

D. Temas especiales, riesgos y Salvaguardas

1. Temas especiales

4.14 Como se especifica en el capítulo III se han identificado acciones del Programa cuya ejecución podría iniciarse de inmediato a partir de la ratificación por el Congreso del préstamo del Banco. Estas acciones son: (i) aquellas incluidas en el componente de reordenamiento legal e institucional que se orientan a apoyar las reformas, incluyendo estudios y eventos de concertación sobre la nueva ley y sus reglamentos; (ii) la actualización de la red geodésica; y (iii) la recuperación y salvaguarda electrónicas de los registros existentes en peligro de pérdida en el TST. Otros componentes del programa requieren un marco legal e institucional específico, o decisiones que el propio Programa se propone ayudar a desarrollar.

2. Riesgos y salvaguardas

4.15 El riesgo más importante de la operación es que no se adopten la decisiones políticas asociadas al mencionado marco jurídico e institucional; en especial los cambios legales y organizacionales necesarios para garantizar la autonomía presupuestaria y administrativa del Poder Judicial, en general, y de la Jurisdicción de Tierras en particular y se deje al esfuerzo de modernización

desprovisto, en consecuencia, del requisito de fondo para su desarrollo sostenido y el mantenimiento y reposición de las inversiones. Salvaguarda: Este riesgo se ve disminuido por el hecho de que el principal mandato que garantiza la independencia judicial y su autonomía presupuestaria se encuentra ya vigente con la reforma constitucional de 1994. También ya está vigente la Ley de Autonomía Financiera del Poder Judicial y el Congreso Nacional, aprobada en febrero de 1997, aunque falta el desarrollo y fortalecimiento institucional pertinente dentro del Poder Judicial y de la Jurisdicción de Tierras para que la gestión presupuestaria y administrativa sea eficaz. Utilizando la modalidad de ejecución basada en revisiones anuales de seguimiento la presente operación dosificará sus acciones, enlazándolas a los avances en la implementación específica de las reformas establecidas en la matriz acordada al efecto con las autoridades.

- 4.16 Otro riesgo proviene de la probable oposición a los cambios que se adopten por parte de oficiales y funcionarios que se benefician con el actual estado del sistema. Salvaguarda: El enfoque del Programa tiende a contrarrestar esta potencial oposición ya que no excluye la existencia de espacios legítimos de gestión que pueden ser asumidos por la iniciativa privada dentro de un sistema de titulación organizados en forma eficiente y transparente. De hecho se provee incentivos positivos al profesionalismo mediante capacitación y entrenamiento en servicios sobre el uso de tecnología avanzada que incrementaría la productividad de los agentes del sistema, tanto en el sector público como en el privado. En cualquier caso, se requerirá de voluntad política por parte de las autoridades para hacer cumplir las reformas y disposiciones asociadas, y la firme aplicación del régimen disciplinario de la Jurisdicción.

REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE TIERRAS
DR-0118

Marco Lógico Preliminar

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>judicial en la tenencia de de inversionistas.</p> <p>de recursos de fines productivos.</p> <p>mercado inmobiliario.</p> <p>tecnologías agrícolas y los.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Las operaciones de financiamiento hipotecario se incrementa en un 10% en los 5 años posteriores a la ejecución. - Las operaciones del mercado inmobiliario se incrementan en 15% en los 5 años posteriores a la ejecución. - Las operaciones de financiamiento al mejoramiento tecnológico de la producción y de los suelos agrícolas se incrementa en 15% en los 5 años posteriores a la ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estadísticas de la Banca Hipotecaria - Estadísticas de la Banca Comercial y de desarrollo 	<p><u>De fines a sostenibilidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se levantan otras restricciones al ahorro y la inversión privada, cuasifiscales que afectan las tasas, ausencia de mercados de capitales etc. - Se mantiene la estabilidad macroeconómica, no ocurre contracción del PIB.
<p>judicial modernizada y eficiente control de la propiedad</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El presupuesto del TST es manejado en forma descentralizada, durante los últimos 2 años de la ejecución. - Los Jueces de la Jurisdicción son nombrados con arreglo a criterios normativos, durante los últimos 2 años de la ejecución. - Las sentencias, expediciones de títulos y otros actos de saneamiento de la propiedad se incrementan en un 15% durante los últimos 2 años de la ejecución. - El número de mensuras y levantamientos catastrales efectuados con arreglo a las nuevas tecnologías se incrementa en 25% en los últimos 2 años de la ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de ejecución presupuestaria de la Jurisdicción de Tierras. - Estadísticas de los tribunales y registros (a ser implantadas por el proyecto) - Estadísticas de las oficinas de catastro (a ser implementadas por el proyecto) 	<p><u>De propósito a fines</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Los magistrados y autoridades judiciales superiores son probos y aplican la ley con arreglo al espíritu de la legislación, principios de ética profesional. - Los funcionarios y personal de apoyo desempeñan honorablemente y aplican correctamente los conocimientos durante la capacitación.

REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE TIERRAS
DR-0118

Marco Lógico Preliminar

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Constitucional de la as reformado</p> <p>Procedimientos de la as actualizados</p> <p>Equipamiento de la as adecuados</p> <p>os de la Jurisdicción de</p>	<p>1.1 Ley de Registro de Tierras reformada y Reglamentos instituidos, el segundo año del programa</p> <p>1.2 Organización Administrativa de la Jurisdicción actualizada conforme a reglamentos, el tercer año del programa</p> <p>1.3 Documentación básica del Registro de Tierras recuperada y almacenada conforme a criterio de seguridad jurídica, el segundo año del programa</p> <p>1.4 Sistema de Información y Control Gerencial de la Jurisdicción de Tierras implantado y funcionando, el segundo año del programa</p> <p>2.1 Puntos de referencia de la red de apoyo geodésico-catastral actualizados en un 100%, el tercer año del programa</p> <p>2.2 Tecnología moderna de levantamiento catastral implantada, el segundo año del programa</p> <p>2.3 Sistema de información de catastro jurídico plantado, el segundo año del programa</p> <p>3.1 Edificio sede del TST remodelado y en funcionamiento, el tercer año del programa</p> <p>3.2 Módulos regionales construidos y en funcionamiento en un 100%, el cuarto año del programa</p> <p>3.3 Mobiliario y equipo de los módulos regionales instalados en un 100%, el cuarto año del programa</p> <p>4.1 70% del personal de la Jurisdicción capacitado, en las nuevas tecnologías y procedimientos, el cuarto año del programa</p> <p>4.2 Programa de divulgación sobre nuevos procedimientos de la Jurisdicción ejecutado en un 100%, el cuarto año del programa</p>	<p>1.1. Récord Legislativo del Congreso</p> <p>1.2 Texto de la Ley y sus Reglamentos promulgados</p> <p>1.3 Informes de inspección de los sistemas informáticos y de control de gestión</p> <p>2.1 Informes de inspección geodésica de campo</p> <p>2.2 Archivos de registro de catastro y de la propiedad</p> <p>2.3 "Print outs" del sistema de información de catastro jurídico</p> <p>3.1 Informe de supervisión de obras</p> <p>3.2 Inspecciones de campo</p> <p>4.1 Récords de asistencia a eventos de capacitación</p> <p>4.2 Récords de evaluación de la capacitación</p>	<p><u>De componentes a propósito</u></p> <p>- Las Autoridades Judiciales cumplen condiciones o "Triggers" para la uno de los componentes.</p> <p>- El Congreso Nacional aprueba legislativas necesarias al avance de Tierras.</p> <p><u>De actividades a componentes</u></p>
<p>dentro del plan de trabajo</p> <p>misión de lanzamiento del</p>			

RGII-DR034P
DR-0118
Original: español
Apéndice I

PROYECTO DE RESOLUCION

REPUBLICA DOMINICANA. PRESTAMO ____/OC-DR A LA REPUBLICA DOMINICANA
(Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Dominicana, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras. Dicho Financiamiento será por una suma de hasta US\$32.000.000, que formen parte de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los "Plazos y Condiciones Financieras" y a las "Condiciones Contractuales Especiales" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.

RGII-DR041P
DR-0118
Original: español
Apéndice II

PROYECTO DE RESOLUCION

REPUBLICA DOMINICANA. PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL
PRESTAMO No. ___/OC-DR A LA REPUBLICA DOMINICANA
(Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco, en su carácter de administrador de la Cuenta de la Facilidad de Financiamiento Intermedio, en adelante la "cuenta", proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Dominicana, como Prestatario, y a adoptar las demás medidas pertinentes para utilizar recursos de la cuenta con el objeto de pagar una parte de los intereses adeudados por el Prestatario sobre los saldos deudores de hasta US\$20.300.000 del préstamo autorizado mediante la Resolución DE-___/___, siguiendo las disposiciones indicadas en el Documento FN-263-11, aprobado por el Directorio Ejecutivo el 21 de diciembre de 1983, y sus modificaciones.